Globethics Repository



El «complejo» Coca/Cocaína… no es tan simple [The "complex" Coca / Cocaine ... is not so simple]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Laserna, Roberto
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-14 23:17:53
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219523

Nueva Sociedad Nro. 143 Mayo.Junio 1996, pp. 56-61

El «complejo» Coca/Cocaína… no es tan simple

Roberto Laserna

Roberto Laserna: sociólogo boliviano, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social-CERES, Cochabamba. Miembro del Comité Directivo del CLACSO.

Nota: este artículo es una réplica a «Cinco tesis sobre el trasfondo coca/cocaína en Bolivia», de José Blanes y H.C.F. Mansilla, publicado en el número 142 de *Nueva Sociedad.*

Resumen:
El debate sobre el complejo coca/cocaína está sometido a varias lógicas de diverso tipo. Allí se encuentra desde el sentido común más acrítico y menos científico, hasta el desacuerdo general sobre lo que en realidad es describe con la palabra «complejo». Por ello, más que proponer argumentos que legitimen las políticas de exclusión social y económica, conviene observar el problema con una mirada franca, sin sesgos frente a los datos de la realidad.

Cuando el éxito no es total –y el fracaso tampoco, es que nos encontramos en una de esas situaciones en que conviven el éxito y el fracaso, tan comunes y frecuentes, y tan difíciles de comprender. Es que en ellas todos encuentran argumentos para Justificar sus propias perspectivas poniendo de relieve una u otra cara de la medalla.

En la guerra antidrogas nos encontramos, ciertamente, en una de esas situaciones. Lleva ya más de ocho décadas, fuertemente marcada por la prohibición y la represión estatal, y se ha intensificado concentrándose en la problemática coca-cocaína durante los últimos 15 años. Hay en ella éxitos y fracasos, y buena parte M debate se concentra en evaluar cuál es el grado de éxito, o de fracaso, de esa política.

Sus impulsores llevan las estadísticas triunfales de la «guerra» contando el número de detenidos y muertos, la cantidad de droga confiscada, los carteles y las pandillas desarticuladas, y siempre logran justificar la necesidad de continuarla con datos sobre consumidores, adictos y muertos por sobredosis. A su vez, quienes se oponen a esta «guerra» ponen de relieve las cifras de su fracaso, igualmente abundantes y convincentes. El dinero gastado en ella, las libertades y los derechos ciudadanos sacrificados, la inutilidad de tanto esfuerzo el la luz de sus pobres resultados. Solo en el tema de la cocaína, destaca el

hecho de que, a tres lustros de «guerra», la droga en los mercados es de mejor calidad, precio más bajo, y mucho más accesible. Además de enfrentar la competencia de otras drogas artificiales, lo cual demuestra que el problema no está en cuál droga se consume, sino en por qué se la consume.

Lamentablemente, cuando se confrontan estos argumentos surgen conclusiones irreconciliables que ni siquiera logran establecer un acuerdo sobre el grado de éxito (o de fracaso), y mucho menos permiten avanzar en una evaluación del proceso. Los «guerreros» dirán que sí, que hay fracasos, pero que el daño a la sociedad seda mayor si no se hubieran logrado los éxitos de la guerra, y que por tanto no sólo hay que continuarla sino intensificarla. Los otros levantarán las manos, denunciarán los intereses creados en este pequeño equivalente burocrático del complejo civil-militar que denunciara Eisenhower, y reiterarán su convicción de que la guerra continuará fracasando para que los poderes involucrados en ella se reproduzcan y beneficien a costa de la sociedad.

El mayor riesgo en este debate, sin embargo, radica en la simplificación de razonamientos y la búsqueda de «verdades» y «trasfondos» basados en el sentido común más que en la investigación científica. De hecho, de ese tipo de actitudes nació esta «guerra» contra objetos en la que, empero, los sacrificados son siempre humanos, cuyas necesidades, angustias y problemas son despreciados e ignorados por los «comandantes» y sus racionalizadores «estrategas».

Más o menos pobres... pero pobres

Nadie podría negar que en este debate hay discursos e ideologías encubridoras que obstaculizan toda solución. Pero ¿cómo puede haber solución a un problema si ni siquiera hay acuerdo en su definición? Todos hablan de «el problema de la droga» pero, sin definirlo, se refieren en realidad a cosas y fenómenos diferentes. Y sin duda la confusión resultante facilita su aprovechamiento particularista por parte de grupos de interés, sea que estén directamente involucrados en el problema, como los productores de coca y los policías a cargo de la interdicción, o que lo usen para expresar otros objetivos, como los políticos y los expertos en desarrollo. Pero no se puede reducir toda la dificultad a un problema ideológico, dado que los productores, los traficantes, los policías y los consumidores no están buscando resolver un teorema o demostrar una hipótesis con sus acciones sino, sobre todo, están tratando de resolver o paliar sus problemas de sobrevivencia, de acumulación, de ascenso social y/o de reproducción.

Cuando los campesinos que producen coca en el trópico boliviano defienden su cultivo tal vez enarbolen discursos apelando a la soberanía o a la tradición, pero en realidad defienden sus ingresos y su derecho a vincularse al mercado. No tiene la misma relevancia preguntarse si son migrantes de las zonas más

pobres y si ellos mismos eran pobres, que preguntarse si tienen o tuvieron otras y mejores opciones para mejorar sus vidas. Porque sin duda lo que buscaron esos campesinos, y lo lograron (por eso defienden la cosa), era mejorar las oportunidades de vida de sus hogares. Pero ¿cuánto mejoraron? Los ideólogos de la guerra antidrogas dirán que mucho y hasta mencionarán algunas cifras, con frecuencia suficientemente exageradas como para restar legitimidad a las demandas campesinas. Los datos existentes son menos exagerados. La Encuesta de Hogares Rurales de 1991 (realizada en Cochabamba) encontró que el ingreso familiar de las unidades agropecuarias en el trópico es cuatro veces superior al de las zonas de valles y serranías, pero esa diferencia se acorta cuando se toman en cuenta las diferencias de precios de los bienes de consumo –más altos en el trópico– y la mayor dependencia del mercado en estas zonas. Y en una medida de calidad de vida habría que considerar, además, los elevados costos de la adaptación, la disgregación familiar, las enfermedades y la presión policial en esas zonas. Los ingresos son más altos para los productores de coca, pero la incertidumbre económica y política del cultivo de coca es tan alta que inhibe comportamientos (inversiones) de mediano y largo plazo. Y aunque comparativamente los campesinos del Chapare pueden encontrarse mejor que otros campesinos bolivianos, están muy lejos de haber superado la pobreza.

Los análisis sobre el comportamiento económico de los productores de coca reproducen, además, las más simplistas versiones de la teoría de la oferta e, imaginando un inexistente productor especializado que busca maximizar las utilidades, plantean conclusiones improbadas como si fueran «verdades» indiscutibles. La realidad es más complicada de lo que esa «ciencia» admite y de ahí nacen tanto la mayor parte de los perjuicios disfrazados de «tesis», como las propuestas de política que fracasan una y otra vez.

El público opina... distinto

Parecidas «verdades» son las que se refieren, sin ningún sustento empírico, a «la opinión pública» o a «la mayoría de la gente» y sus supuestas actitudes de indiferencia, tolerancia y falta de preocupación por los temas de la producción de drogas y las políticas antidrogas.

Los últimos estudios realizados en el país señalan claramente que la población está preocupada, no solamente por el llamado «narcotráfico» sino también por las presiones que el mismo genera tanto en la vida política como en su propia vida cotidiana.

Una reciente encuesta de seguridad humana levantada por el Instituto Nacional de Estadística bajo la conducción del PNUD y la Vicepresidencia, por ejemplo, encontró que aunque el narcotráfico aparecía como el más bajo de otros quince problemas principales de seguridad personal (era así considerado por el 0,19% de la población), cerca del 60% de la gente expresaba temor a ser agredido por

el problema, y prácticamente la mitad consideraba que el mismo podía afectar su seguridad personal. Y una proporción incluso mayor (66%), expresó su temor de que el «narcotráfico» perturbe la estabilidad democrática. Obviamente, no se trata solamente de un temor a «los narcos», sino a todo el conjunto de tensiones que se generan en tomo a la ilegalidad, incluyendo naturalmente las presiones externas y los autoritarismos internos. No hay de ninguna manera indiferencia en la población.

Y los bolivianos tampoco ignoran las dimensiones internacionales del problema. Una reciente encuesta realizada por la Dirección de Prevención contra la Drogodependencia, con apoyo de AID de Estados Unidos, demostró no solamente que sus campañas de atemorización sobre el peligro de la droga han tenido alguna eficacia[1], sino que la gente está cada vez más convencida de que los problemas deben resolverse en acciones concertadas. La mayor proporción, 37,8%, cree que la solución pasa por acciones en los países consumidores y en los productores. Solo 33% cree que el problema es exclusivo de los países consumidores, y un 24% de los productores. Si una encuesta, que por lo general simplifica la realidad al extremo, es capaz de mostrar estos datos, con seguridad que «el público» tiene una opinión bastante más desarrollada de la que parecen capaces de observarle los ensayistas de la «guerra».

Del verbo subvencionar

Finalmente, una rápida referencia al que es posiblemente el cálculo más sesgado de los que se realizan a la hora de evaluar logros y fracasos en la lucha antidroga. Suele argumentarse que el pueblo, a través del Estado, ha estado subvencionando la producción ¡legal mediante inversiones en desarrollo alternativo y compensaciones por erradicación de cocales. En este caso se ignora que también los campesinos han sacrificado ingresos posibles, cuya consideración permitiría situar el análisis en un mínimo de ecuanimidad.

Un estudio de Reynaldo Marconi menciona que entre 1987 y 1993 se destinaron 48 millones de dólares para compensar la erradicación[2]. En ese mismo período, según datos oficiales recogidos por la revista *ProCampo* (Nº 67, 1/1996), se erradicaron 24.000 hectáreas de coca. En esa misma fuente se

---

[1] V. Franklin Alcaraz y otros: *Opiniones sobre el uso indebido de drogas en Bolivia,* Ministerio de Desarrollo Humano, La Paz. Uno de los datos que más se ha publicitado de la encuesta es que un 62,8% de la gente cree que el consumo de drogas aumentó. Después de una intensa campaña publicitaria para convencer al país que el consumo aumenta, era obvio que la población terminara creyéndola, aunque no tuviera evidencias directas de que efectivamente eso ocurre. Notablemente, las encuestas de consumo siguen mostrando un nivel comparativamente bajo de consumo habitual y reciente de drogas, y sobre todo de la cocaína y derivados.

[2] Reynaldo Marconi: *El drama del Chapare. La frustración del desarrollo alternativo*, Ed. CEDLA, La Paz, 1994.

plantea la hipótesis de cálculo de lo que hubiera ocurrido si esos cocales hubieran continuado en producción, y la coca se hubiera vendido a los precios de cada año (que son fuertemente presionados hacia abajo por la interdicción). El resultado de la estimación señala que hubieran proporcionado a los campesinos el equivalente a 203 millones de dólares, de donde resulta que ellos habrían contribuido con la diferencia de 155 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico en ese mismo período. Las inversiones directas en desarrollo alternativo, según el mismo Marconi, alcanzaron a 146 millones en esos años. No es fácil determinar quién subvenciona a quién en esta «guerra», con la diferencia de que no todos tienen el mismo poder de decidir cómo se la conduce y hacia dónde

Obviamente, estos datos pueden ser interpretados de otra manera e incluso forzar comparaciones que enfaticen la magnitud del fracaso, como cuando se compara el total gastado con la cantidad de hectáreas «netas» de erradicación. Pero estas comparaciones no solamente son forzadas sino también injustas, porque pretenden generalizar hacia todo el campesinado del Chapare boliviano una imagen falsa de gente aprovechadora y chantajista, que no hace más que pedirle y exigirle al Estado la solución de sus problemas individuales.

En Bolivia pocos grupos sociales han demostrado, individual y colectivamente, iniciativa, capacidad de innovación, sentido de riesgo y percepción para adaptarse al mercado. Un análisis desprejuiciado debería considerar, entre esos grupos, a los campesinos que migraron al Chapare. Si ahora ellos demandan acciones de apoyo del Estado, es porque del Estado provienen también las acciones de intervención que perjudican su restringida capacidad económica. Hay probablemente razones que están más allá de las razones en quienes no quieren entender esta sencilla lógica. Y es que no hay liberal más peligroso que el que se cree único dueño de la verdad, porque en nombre de la razón acaba buscando la exclusión de los demás.